

Juicio No. 06334-2023-00233

**JUEZ PONENTE:VERDUGO LAZO JORGE EDUARDO, JUEZ PROVINCIAL
AUTOR/A:VERDUGO LAZO JORGE EDUARDO
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL,PENAL MILITAR,PENAL POLICIAL Y
TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO.
Riobamba, jueves 11 de abril del 2024, a las 15h21.**

DECISIÓN UNÁNIME

JUEZ PROVINCIAL PONENTE: JORGE EDUARDO VERDUGO LAZO

VISTOS. - Toda vez que se ha efectuado la diligencia procesal de audiencia oral, pública y contradictoria de estrados para analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del Ministerio de Educación del Ecuador, respecto a la sentencia emitida por el señor abogado Marco Angueta Pérez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Colta, provincia de Chimborazo.

Para resolver, de conformidad con los artículos 168.6 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, -en lo posterior CRE- en relación con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, luego de escuchar los argumentos de los sujetos procesales, la revisión del expediente íntegro, el dispositivo magnetofónico que contiene la grabación de la audiencia en primera instancia, luego de la deliberación, corresponde emitir por escrito observando el deber de motivar la decisión judicial en aplicación del mandato establecido en el artículo 76, numeral 7, literal I de la CRE, procedemos en base al siguiente razonamiento jurídico:

I

POTESTAD JURISDICCIONAL Y COMPETENCIA

1. Los Jueces Provinciales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, designados previo sorteo de ley, Fernando Cabrera Espinoza, Luis Donoso y Jorge Eduardo Verdugo, quien actuará como ponente y sustanciador, asumimos potestad jurisdiccional y competencia para resolver el recurso de apelación planteado, de acuerdo con el contenido de los artículos 178.2 de la CRE, artículos 151, 159, 160, 163.3 y 208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

II

TRAMITACIÓN JURÍDICA PROCESAL

2. Toda vez que ninguno de los intervinientes, han cuestionado o recusado, ya sea a través de medio escrito u oral, la competencia de este Tribunal de Apelación, por lo que la actuación se enmarca a lo dispuesto en los artículos 178, numeral 2, y 76, número 7, literal “k” de la CRE, en concordancia con el contenido de los artículos 208 y 209 del Código Orgánico de la Función Judicial.

3. El recurso de apelación es admisible por lo siguiente: a) de las sentencias, son susceptibles de ser recurridas; b) El recurso ha sido interpuesto observando las exigencias procesales; c) cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 2, literal “h” de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y artículo 76, numeral 7, literal “m” de la CRE, este Organismo Pluripersonal, conoce la petición del recurrente haciendo efectivas sus garantías constitucionales -recurrir de la resolución ante un Juez distinto al anterior.

III

ANTECEDENTES JURÍDICOS PROCESALES

4. a.- El miércoles 13 de septiembre de 2023, a las 14:54’ las ciudadanas Elsi Lucrecia Sánchez Ramírez y Fanny del Rocío Abarca, accionan el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la interposición de acción de protección en contra de las autoridades del Ministerio de Educación del Ecuador, en la persona de la Ministra María Brown, y del Director Distrital 06D04 del mencionado Ministerio, alegando la transgresión de los siguientes derechos: Derecho a la igualdad y no discriminación, derecho al trabajo en la garantía de una vida decorosa, remuneraciones justas y el principio de a igual trabajo, corresponderá igual remuneración, derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, derecho a la seguridad jurídica. Luego de haber realizado el sorteo de ley, se ha establecido la competencia en el despacho del abogado Marco Angueta, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Colta, provincia de Chimborazo.

5. b.- Con posterioridad, los días 05 de octubre y 09 de noviembre del 2023, bajo la dirección del prenombrado Juzgador, se ha desarrollado la audiencia de sustentación de la acción de protección con la participación de la generalidad de intervinientes. Luego de cumplida la diligencia procesal, el señor Juez A quo, ha decidido aceptar la acción de protección propuesta por las ciudadanas Sánchez Ramírez y Abarca Abarca.

6. c. A continuación, después de ser emitida la decisión oral en la audiencia, la parte accionada manifiesta de forma oral manifiesta su desacuerdo con la misma e interpone

de manera oral el correspondiente recurso de apelación, por lo que el señor Juzgador ha cumplido con el examen de admisibilidad del recurso vertical, remitiendo el expediente a la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo; consecuentemente mediante sorteo de ley cumplido el 21 de diciembre de 2023, se ha conformado el Tribunal de Apelación.

7. d. Finalmente, el lunes 05 de febrero de 2024, a las 08:30' se llevó a cabo el desarrollo de la audiencia oral, pública y contradictoria, de estrados ante el Tribunal competente.

IV

FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS VERTICALES DE APELACIÓN

8. En patrocinio de la entidad pública accionada, comparecieron los abogados Rigoberto Chicaiza y Andrés Velasteguí, quienes mencionaron lo siguiente:

a) Que se ha presentado el recurso de apelación por cuanto en la sentencia no se tiene en cuenta aspectos esenciales, ya que se solicita el pago de sus remuneraciones desde el año 2014 al 2019, de 1.600 dólares, esta cartera de Estado, solicita se tenga en cuenta la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, por cuanto existen los órganos judiciales como el Ministerio de Trabajo para realizar tales reclamos, lo que no ha sido considerado por el Juez de instancia.

b) Corresponde analizar que en el año 2019, las accionantes fueron recategorizadas y les corresponde el sueldo de 1600 dólares, por lo que no se puede cancelar los rubros desde el año 2014, no siendo la vía constitucional la idónea ya que se pretende la declaración de derechos.

c) De acuerdo a la sentencia 1679-12-EP, foja 14, párrafo 65 indica que la duración de la relación laboral debe ser sometida al contencioso administrativo, por lo que el Juez realizó una mala interpretación.

d) Que se acepte el recurso de apelación y se revoque la sentencia recurrida.

9. En representación de la Procuraduría General del Estado, intervino el doctor Vicente Altamirano, quien presentó las siguientes alegaciones:

a) Un elemento importante que no se ha tomado en cuenta conforme lo determina la sentencia 1158-EP-/21 de la Corte Constitucional, la sentencia recurrida presenta una deficiencia motivacional, el Juez hace alusión a las alegaciones de los abogados del Ministerio de Educación.

b) Las accionantes acudieron a la justicia contencioso administrativa y obtuvieron sus

sentencias, no procede el pago retroactivo de las remuneraciones por ellas propuestas.

c) Que se verifique los elementos dentro de la sentencia y se revoque la misma.

10. En representación de las ciudadanas accionantes Sánchez Ramírez y Abarca Abarca, compareció el abogado Luís Alejandro Remache, quien presentó los siguientes argumentos:

a) Que el Ministerio de Educación por reiteradas ocasiones ha indicado que el Juez no ha tomado en cuenta la sentencia de la Corte Provincial de Cotopaxi, la misma no es vinculante. La administración pública nunca emitió otra acción de personal, las accionantes todo el tiempo estuvieron encargadas de administradoras de circuito, es decir cumplían doble función, se les ha sobrecargado de trabajo.

b) Se menciona que la demanda en el contencioso administrativo, es cosa juzgada lo que no es verdad, ahí se les pidió que sean reclasificadas y se les cancele la remuneración en la que no ordenaron el pago retroactivo, es por eso que se ha presentado la acción de protección.

c) Ha existido un trato diferenciado e injustificado que se traduce en discriminación respecto a las accionantes quienes han sido tratadas de manera diferente respecto a los demás funcionarios del mismo ministerio.

d) Solicita que se rechace el recurso de apelación y se ratifique la sentencia de primer nivel.

V

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ALZADA

11. De conformidad con el contenido del artículo 88 de la CRE, que establece: La acción de Protección, constituye una garantía jurisdiccional que protege derechos frente a actos que los vulneran, misma que configura un proceso de tutela de derechos constitucionales y una acción contra cualquier acto de poder sin importar si proviene del Estado o de un particular, este último que puede ejercer poder económico, político, es decir cuando los particulares actúan con *imperium*.

12. De esta manera, al razonar sobre la naturaleza de las garantías jurisdiccionales a la luz de la Norma Suprema, el constitucionalista Ramiro Ávila Santamaría, considera lo siguiente:

La acción de protección como una acción de conocimiento que tiene como objetivo reparar integralmente la violación de derechos proveniente de autoridad pública o particulares. Es decir, la acción de protección constituye una acción reparatoria, lo cual le da un carácter trascendental, puesto que la víctima de la violación ciertamente vería tutelados sus derechos si alcanza una reparación integral de los daños ocasionados y la garantía habría cumplido con su objeto de amparo directo y eficaz de tales derechos.

13. En lo relativo a la naturaleza y objeto de la garantía jurisdiccional de acción de protección, el profesor Juan Francisco Guerrero del Pozo, manifiesta:

La acción de protección tiene por objeto el amparo de todos los derechos fundamentales que no puedan ser protegidos a través de una garantía específica. Es decir, es una garantía de naturaleza claramente tutelar, y para que proceda se tiene que haber vulnerado un derecho. Es importante mencionar que la acción de protección no prescribe, por cuanto los derechos son inalienables e irrenunciables.

14. En similar modo, la acción de protección prevista en el artículo 88 de la CRE y artículo 39 de la LOGJCC, consagra que esta garantía constitucional tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Norma Suprema, a través de un procedimiento especial, basado en los principios de preferencia y sumariedad, que pretende proteger de manera inmediata cualquier vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones efectuados por personas naturales o jurídicas del sector privado cuando presten servicios públicos impropios, por delegación o concesión, provoquen un daño grave, o la persona se encuentre en situación de subordinación, indefensión, frente al poder económico, social o cultural.

15. En una sentencia de garantías jurisdiccionales, el Organismo de Apelación desarrolla un análisis de la sentencia recurrida y de la realidad procesal en su conjunto para determinar la existencia o no de una real transgresión de derechos constitucionales a partir de los hechos del caso sub examen. Dicho de otro modo, las cuestiones jurídicas que resuelve el Organismo en este tipo de sentencias deben generarse y limitarse a los hechos del caso concreto objeto de la apelación.

16. Con fundamento en lo anterior, para una correcta estructura de la sentencia y fácil

comprensión de esta se organizará por cuestiones jurídicas a resolver, mismas que devienen del proceso de primera instancia y las alegaciones realizadas por los intervinientes en la audiencia de estrados y la revisión exhaustiva de la realidad procesal en su conjunto.

17. Así, para legitimar la decisión de ratificar la sentencia de primera instancia, las cuestiones jurídicas que resolverá el Organismo en el caso in comento, son a saber:

- a. ¿La omisión en el pago de las remuneraciones justas en función de los cargos ejercidos y encargados mediante acciones de personal, vulnera derechos constitucionales de las ciudadanas accionantes?
- b. La sentencia recurrida incurre en vicios motivacionales que vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación ?

RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS

18. Al tenor de las cuestiones jurídicas esbozadas en la presente sentencia, el Organismo identificará las circunstancias que constan en la realidad procesal en su integridad, para luego desarrollar la correspondiente argumentación jurídica.

- a. Cuestión uno: ¿ La omisión en el pago de las remuneraciones justas en función de los cargos ejercidos y encargados mediante acciones de personal, vulnera derechos constitucionales de las ciudadanas accionantes?

19. Iniciaremos con un abordaje doctrinario, para ello se cita al jurista Juan Montaña, quien refiere lo siguiente:

[...] para que proceda la Acción de Protección, la vulneración del derecho necesariamente debe afectar el contenido constitucional o contenido esencial del mismo y no a las otras dimensiones del derecho (...) que la vulneración se haya dado por acción u omisión de autoridad pública no judicial o de un particular de conformidad con lo establecido en la Constitución. Este presupuesto no requiere mayor precisión, solo destacar que, a diferencia de la figura tradicional del amparo constitucional, la Acción de Protección extiende su ámbito también a las relaciones entre particulares para garantizar con ello la eficacia de los derechos constitucionales.

20. De similar modo, desde la perspectiva jurisprudencial, existen múltiples pronunciamientos de la Magistratura Constitucional del Ecuador que reflexiona:

“La Acción de Protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional, ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces de la jurisdicción ordinaria”.

21. Con los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales delineados, se explicita los presupuestos de admisibilidad, procedencia, efectos, ámbito material de protección y naturaleza de la justicia constitucional, procurando enfatizar en que las garantías jurisdiccionales, específicamente, la acción de protección no puede ser utilizada para la declaración de derechos, el amparo de derechos de carácter patrimonial y no constitucionales, intromisión en temas de estricta legalidad que deben ser resueltos en la justicia ordinaria, tales circunstancias son calificadas por la *ius teoría* como el proceso de ordinarización de la acción de protección, al pretender que cualquier incidente o conflicto originado en el conglomerado social, sea remitido a la esfera de la justicia constitucional, aquello no ha se evidencia en la causa sub examine, dado que se ha determinado un problema jurídico de relevancia por la vulneración de derechos de rango constitucional, que han sido tutelados por la autoridad jurisdiccional de primera instancia.

22. Lo antes explicitado desnaturaliza la característica de la acción de protección de ser un proceso reparatorio, que requiere de la verificación por parte del Juzgador constitucional de una real vulneración al contenido esencial de derechos constitucionales que marque diferencias importantes con respecto a aquellos derechos ordinarios; a la identificación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho y a la imposibilidad de declarar derechos, lo que demanda que los operadores de justicia desarrollen un alto grado de conocimiento y debida diligencia para cumplir con un adecuado examen de admisibilidad y el correspondiente análisis de vulneración de derechos de rango constitucional, lo que sí ha cumplido el señor Juzgador A quo, quien evita desnaturalizar las garantías jurisdiccionales, actuando y resolviendo conforme las disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes, que son de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores de justicia, en su rol de Jueces constitucionales, cuyo *deber ser* constituye el coadyuvar al estricto acatamiento del marco constitucional y legal, a más de la protección de los derechos inter partes.

23. Consecuentemente, como primera conclusión podemos manifestar que en la causa sub análisis el señor Juzgador A quo, con base en un análisis lógico y con absoluto sustento jurídico y constitucional cumple con su deber de efectuar un correcto examen de admisibilidad de la acción de protección, determinar la existencia de vulneración de derechos constitucionales y desarrolla una decisión jurisdiccional que cumple con los parámetros de motivación establecidos por la Magistratura Constitucional, mediante precedentes jurisprudenciales obligatorios.

24. Ello, por cuanto los *obiter dicta* de la decisión resultan concordantes con la ratio decidendi respecto a que la transgresión del contenido esencial del derecho al trabajo en el componente de una remuneración justa y equitativa, acorde con el principio universal de a igual trabajo, igual remuneración. Además, en lo relativo a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, toda vez que las ciudadanas han probado de manera fehaciente que ejercieron funciones acorde con un perfil y remuneración legalmente establecida. No obstante, la entidad pública accionada no ha tutelado el derecho de igual remuneración respecto a las ciudadanas accionantes a pesar de existir sustento legal. En este punto cabe mencionar que, la entidad pública accionada no ha aportado en lo absoluto con elementos de prueba suficientes y relevantes, estando obligados realizarlo en función de la inversión de la carga probatoria para demostrar que las alegaciones de las ciudadanas accionantes no son reales.

25. Idém, en la sentencia recurrida el señor Juez A quo con basto conocimiento y un análisis pertinente de importantes líneas jurisprudenciales vigentes, ha solventado a la inmotivada alegación respecto a la falta de competencia. Concordando en lo absoluto, respecto a que la transgresión del principio de igualdad y no discriminación en perjuicio de las ciudadanas accionadas al no cumplir con la obligación de cancelar los habéres que legalmente les correspondía según la Resolución N° MRL-FI-2012-0640 de fecha 10 de octubre del 2012, vigente a partir del 14 de septiembre de 2012, que expide el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del servicio público, en el mismo se clasifica y establece que el cargo que ejercieron las ciudadanas accionantes equivale a servidor público 7, grado 13 con una remuneración mensual de 1676 dólares americanos. Para el efecto, el Ministerio del ramo ha emitido el correspondiente dictamen presupuestario favorable para la sustitución de los valores de la escala de remuneración mensual unificada a partir de 1 de enero de 2012, lo que ha sido evidentemente incumplida de manera inexplicable por los servidores públicos de los MInisterios involucrados, negligencia que no puede ni persistir ni ser atribuido a las ciudadanas accionantes.

26. En similar modo, la evidente vulneración de derechos constitucionales de las ciudadanas accionantes se origina en el incumplimiento de una norma de carácter previa, clara y pública, en concreto a la Resolución N° MRL-FI-2012, citada en líneas precedentes, que en el artículo 2 determina de manera taxativa que el Ministerio de Educación, con sustento en la estructura de gestión organizacional por procesos, elaborará y mantendrá actualizado el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos que integran la estructura ocupacional. Así también, en el artículo 3 ibídem, establece que el Ministerio del ramo sobre la base del referido Manual, procederá a realizar el análisis ocupacional de las posiciones que ocupan los servidores, a efectos de aplicar el proceso de homologación remunerativa, estudio que deberá ser remitido a esta Cartera de Estado para su aprobación -sic-. Con lo que resulta irrefutable, que la entidad accionada a pesar de existir pleno sustento constitucional, convencional y legal para tutelar el principio de a igual trabajo, igual remuneración respecto a las accionadas omitió aplicar, por ende garantizar los derechos de las servidoras públicas. Precisamente, ahí radica la relevancia constitucional que viabiliza la garantía jurisdiccional de acción de protección y acertadamente el señor Juez A quo, lo resuelve declarando la vulneración de derechos y viabilizando la reparación integral.

27. Desde la perspectiva constitucional, la Carta Fundamental en el artículo 33, establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El mismo artículo señala que el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, así como el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En similar modo, el artículo 325 reconoce el derecho al trabajo, así como todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. De ahí que no se puede legitimar las reales vulneraciones del contenido de derechos constitucionales de las accionantes bajo el pretexto de que no corresponde el análisis de temas de estricta legalidad. Resultando contrario a la lógica jurídica y reprochable que por mucho tiempo las accionantes hayan desempeñado funciones acorde con un Manual de Descripción y una escala remunerativa que en la praxis no haya sido reconocido por la entidad accionada, cuyos representantes tácitamente han admitido y manifestado que son temas que deberían ser resueltos en la vía de la justicia ordinaria, concretamente ante una Judicatura especializada en temas laborales, siendo pertinente y justificada las respuestas brindadas por el señor Juez A quo.

28. La Corte Constitucional del Ecuador, ha establecido como precedentes jurisprudenciales que, respecto al derecho al trabajo será objeto de protección de la

justicia constitucional cuando la presunta transgresión atañe a la dimensión social, que pueda afectar la vida digna de las accionantes o afecte a la protección especial reforzada a favor de personas de atención prioritaria, elemento que se cumple en la presente acción de protección, dado que se ha vulnerado el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa; por ende, tal vulneración irradia a otros derechos, verbigracia el derecho a la alimentación, salud, seguridad social; pues al limitarse la obtención de un sueldo o salario como resultado del trabajo realizado se transgrede el contenido esencial de tales derechos y se torna ineludible su reparación integral.

29. Aunado a las razones esgrimidas en la presente decisión jurisdiccional, tenemos que de conformidad con el contenido del numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador se consagra como obligación del Estado:

“...Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.”; mientras que en el numeral 2 del Art. 11 de la Carta Magna se dispone que, “Nadie podrá ser discriminado por razones que señala la constitución como (de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos) La ley sancionará toda forma de discriminación.”; por su parte en el numeral 4 del Art. 66 del mismo cuerpo normativo, se hace constar como uno de los derechos de todas las personas, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

30. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, ha resaltado la importancia de establecer cuáles son los elementos que permiten distinguir entre una diferencia de trato justificada y aquella que no lo es. Para ello, la Corte formuló un juicio de igualdad a través del test de razonabilidad, compuesto por tres fases: 1. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual; 2. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución, y 3. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.

31. Las ciudadanas accionantes han presentado en primera instancia abundante probanza documental respecto a categorías de comparabilidad, en donde consta que funcionarios y funcionarias que desempeñan labores similares, esto es como servidor público 7, grado 13, reciben la R.M.U. de \$ 1676, mientras que las ciudadanas

accionantes de manera inexplicable e injustificada reciben remuneraciones inferiores, lo que conlleva no solamente la transgresión del derecho a la igualdad material, sino también un trato evidentemente discriminatorio, lo que se encuentra proscrito en la normativa interna y supranacional vigente y aplicable de manera obligatoria, pues todo trato desigual entre iguales, vulnera tal derecho y garantía de carácter constitucional al generar el menoscabo en el reconocimiento y el ejercicio pleno de derechos como se ha evidenciado en el caso in comento.

32. En este caso en concreto, la institución accionada, no se ha opuesto a lo manifestado por las accionantes en su acción respecto a que, a otros compañeros servidores de la entidad -Ministerio de Educación, que se encuentran cumpliendo las mismas funciones, se les cancela la remuneración que corresponde para el cargo antes indicado, mientras que, a las accionantes, se les cancela remuneraciones INFERIORES. Por todo lo antes indicado, se verifica que, la entidad, ha vulnerado el derecho de las accionantes a no ser discriminadas y a la igualdad material.

33. Para determinar si ha existido en un caso concreto afectación a la igualdad y no discriminación; ello, en su esfera constitucional, el Juzgador debe realizar un análisis basado, en los tres elementos o requisitos que se deben cumplir para llegar a dicha conclusión; estos elementos han sido indicados por el máximo órgano de Control de Constitucionalidad en el país; indicando que para configurar un trato discriminatorio debe en primer lugar existir, COMPARABILIDAD; es decir sujetos que estén en iguales o similares condiciones; luego se debe aplicar UNA DE LAS CATEGORÍAS que se enuncian ejemplificativamente en la CRE; y por último VERIFICACIÓN DEL RESULTADO, en donde se evidencie discriminación si la diferencia tiene como objeto el detrimento, o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

34. En el caso sub examen, el señor Juzgador de primera instancia ha efectuado un correcto test de igualdad, pues de la comunidad de prueba consta el trato desigual a las ciudadanas accionantes, ello de manera injustificada, explicamos de la siguiente manera:

a: Comparabilidad.- La Corte Constitucional, refiere que los involucrados deben estar en la misma o similares condiciones; en el caso, podemos observar que las accionantes y otros funcionarios identificados en la prueba documental durante el periodo 2014 al 2019, cumplen las mismas funciones de administradores circuitales; sin embargo, las accionantes reciben remuneraciones diferentes.

b: Trato diferente. En la causa, tenemos que sin explicación, que conlleve sustento

constitucional o legal alguno, las accionantes, bajo el mismo contexto de cumplir mediante encargos, similares funciones que las y los otros funcionarios. La administración busca justificar este trato diferente, por cuanto no existe la norma técnica, que como lo dijimos en párrafos anteriores, ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos. Así, se verifica en la causa un trato diferente, sin que exista una justificación lógica y razonable. En este apartado, vale resaltar lo mencionado por el señor Juez A quo, respecto a que en el año 2015, el propio Ministerio de Educación, dispuso el pago obligatorio por encargos de funciones a partir del año 2014, en el caso en concreto jamás lo ejecutaron.

c: Verificación del Resultado.- El resultado en el presente análisis, lejos de promover derechos, (que se conoce como discriminación positiva) lo que hace es menoscabar el reconocimiento y goce de los derechos como el derecho al trabajo al recibir por igual trabajo igual remuneración; por lo tanto tenemos un trato diferenciado que menoscaba el derecho a la igualdad y no discriminación. Dado que al recibir una remuneración inferior sin justificación razonable surge el trato diferente que en esencia vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.

b) Cuestión dos: La sentencia recurrida incurre en vicios motivacionales que vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación ?

35. Para mantener coherencia con los argumentos desarrollados precedentemente, *prima facie* cabe mencionar que la Autoridad Jurisdiccional A quo aplica de manera correcta y pertinente el precedente jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N° 1158-17-EP/21, que deja atrás aquel criterio rector referente a la motivación, basado en la congruencia, lógica y comprensibilidad; y, ha fijado como argumento central, que se entiende que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa; es decir, integrada por una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. Al mismo tiempo, cuando no contiene esta estructura mínima, entonces adolece de alguna deficiencia motivacional, como son: (i) inexistencia, (ii) insuficiencia, y (iii) apariencias de motivación.

36. Por ende, a criterio del Tribunal de Apelación la decisión jurisdiccional se encuentra motivada, pues se colige que la misma es *suficiente* y cumple con los parámetros de un ejercicio motivacional lógico, coherente, pertinente y racional, ya que, se sustenta en una correcta justipreciación del *factum probatorio* presentado por los intervinientes. De tal

modo, el enfoque argumentativo del señor Juez Aquo, fija una estructura que permite a los sujetos de la relación jurídica procesal y al lector de la sentencia entender cómo fue que se resolvieron los problemas jurídicos planteados, cómo se trazaron las tesis principales de la resolución y qué razones se dieron para ello.

37. Teniendo en cuenta que el análisis y evaluación de la argumentación son dos operaciones ex post, esto es, presuponen una argumentación existente, que en el caso concreto existe y es evidente el ejercicio lógico y comprensible de lo resuelto y las razones conducentes y legitimadoras de la decisión.

38. Consiguientemente, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 1967-14-EP/20, de 13 de febrero de 2020, una forma de analizar la existencia de un argumento mínimamente completo en las resoluciones de garantías jurisdiccionales es la verificación de que los cargos propuestos por el accionante reúnan, al menos, los siguientes tres elementos: la afirmación de que un derecho fundamental se vulneró (la tesis), el señalamiento de la acción u omisión judicial de la autoridad judicial que habría ocasionado la vulneración (la base fáctica) y una justificación que muestre por qué la acción u omisión acusada vulnera un derecho constitucional en forma directa e inmediata (la justificación jurídica).

39. En aplicación del control de convencionalidad, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al estándar mínimo que debe cumplir una resolución para ser considerada debidamente motivada, ha desarrollado el siguiente argumento, en el caso Aptiz Barbera y otros vs. Venezuela:

Que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En tal sentido la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Además, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas, y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.

40. Fortaleciendo el argumento jurisprudencial, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado que la motivación de las resoluciones judiciales en general y de las sentencias en particular, forma parte de la noción del debido proceso y obliga al juzgador a expresar adecuadamente en sus sentencias aquellas razones en que se basa su decisión, y ello comprende tanto la motivación jurídica como la motivación fáctica.

41. A este tenor, una de las garantías incorporadas en la Norma Suprema, es la motivación de las decisiones judiciales, administrativas y fallos so pena de ser declarados nulos. El espíritu de la exigencia de motivación de las resoluciones de los poderes públicos es facilitar a quienes van dirigidas, la comprensión de su contenido, incluso para que puedan ser impugnadas o aceptadas, comprensión que se extiende a todo el conglomerado social para que exista la certeza de que en la decisión está proscrita la arbitrariedad y está basada únicamente en la correcta aplicación de las normas que integran el ordenamiento jurídico al hecho que se resuelve.

42. Por todo lo expuesto, este Tribunal de Alzada, en decisión unánime actuando como Juez Pluripersonal garante del debido y justo proceso, de los derechos constitucionales y legales que les asiste a los ciudadanos, concluye que la sentencia cumple con los requisitos normativos establecidos en la Norma Suprema y normativa infra constitucional, correspondiendo ratificar en su integridad lo resuelto por el señor Juzgador A quo, rechazando la generalidad de cargos impugnatorios planteados de manera improcedente por los abogados de la institución accionada en la audiencia de estrados.

VIII

DECISIÓN JURÍDICO CONSTITUCIONAL

43. En acatamiento de la potestad jurisdiccional que nos concierne, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, en DECISIÓN UNÁNIME, se resuelve lo siguiente:

1.- RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados del Ministerio de Educación del Ecuador.

2.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia emitida por el señor Juez Constitucional abogado Marco Angueta, el miércoles 13 de diciembre del 2023, a las 14:08’.

3.- MODULAR la sentencia en lo relativo a la reparación integral a las víctimas, disponiendo que la entidad pública accionada, publique por el lapso de -03- meses el extracto de la presente sentencia en el sitio web del Ministerio de Educación.

44. La sentencia escrita es el resultado de la deliberación y recoge todos los puntos que fueron razonados previo a asumir la decisión unánime. Además, para determinar el cumplimiento del principio de la debida diligencia en la tramitación de la causa se tiene en consideración la complejidad del caso en análisis, el orden cronológico del sorteo e ingreso a esta instancia, y las alegaciones presentadas en la audiencia de estrados. Se tiene en cuenta la carga procesal en condición de ponente en el despacho de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, aproximadamente -55- audiencias, lo que implica el estudio del caso, revisión de bibliografía, jurisprudencia, redacción, revisión y notificación de sentencias, a más del despacho diario.

45. Las disposiciones convencionales, constitucionales y legales aplicables al caso concreto, se encuentran referidas en el desarrollo sistemático del fallo.

46. Con posterioridad, una vez ejecutoriado el presente fallo devuélvase de manera inmediata el expediente a la Judicatura de origen, para que se proceda con la ejecución de lo resuelto.

47. Intervendrá el señor abogado Washington Arias, en calidad de Secretario Relator encargado, designado por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. EFECTÚESE Y PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DE LOS INTERVINIENTES.

VERDUGO LAZO JORGE EDUARDO

JUEZ PROVINCIAL(PONENTE)

CABRERA ESPINOZA CARLOS FERNANDO

JUEZA PROVINCIAL

DONOSO BAZANTE LUIS ENRIQUE

JUEZ PROVINCIAL